



Exp.: 001-075154 Ley de Transparencia
Asunto: Exp. 2/2023 LGT-SGAT

RESOLUCION

VISTO el expediente administrativo iniciado por solicitud de acceso a información pública presentada por [REDACTED], y teniendo en consideración los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero: Con fecha 18 de enero de 2023 se inicia la tramitación del expediente, que tuvo entrada en este Organismo a través de la Unidad de Información de Transparencia de este Ministerio, correspondiente al escrito de petición de [REDACTED], de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, quedando registrada con el número 001- 075154.

Segundo: El contenido de la solicitud es el siguiente:

"Se solicita la información contenida en el registro de infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales de los últimos cinco años. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, dicho registro es "de consulta pública" y debería contener los siguientes datos:

- Nombre o razón social de la empresa sancionada.*
- Sector de actividad a que se dedica.*
- Número de Documento Nacional de Identidad de las personas físicas o Código de Identificación Fiscal de las personas jurídicas.*
- Domicilio social.*
- Infracción cometida.*
- Sanción económica impuesta, incluyendo la cuantía de la misma, así como las demás sanciones impuestas con carácter principal o accesorio, si las hubiera.*
- Fecha de extensión del acta de infracción.*
- Fecha en la que la sanción adquiere firmeza."*

A los anteriores hechos son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero: La Directora del Organismo público Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene atribuida la competencia para conocer y resolver el presente expediente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la medida que dicho órgano es el que posee la información solicitada.

CORREO ELECTRÓNICO/WEB:

itssgat@mites.gob.es
www.mites.gob.es/itss

Pº de la CASTELLANA, 63
28071 MADRID
TEL: 91 363.11.63/64/64/30393
D R:EA0021862

Página 1 de 6


CSV :

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : CARMEN COLLADO ROSIQUE | FECHA : 02/03/2023 11:52 | Sin acción específica



Segundo: El artículo 12 de la Ley transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b de la Constitución Española, precepto que es desarrollado por la citada Ley.

Tercero: Respecto de la petición concreta señalar que, en su solicitud,  indica que "Se solicita la información contenida en el registro de infracciones graves en materia de prevención de riesgos laborales de los últimos cinco años. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 597/2007, de 4 de mayo, sobre publicación de las sanciones por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, dicho registro es "de consulta pública" ..."

Pues bien, si analizamos el citado Real Decreto 597/2007, en su artículo 2, al regular el procedimiento para hacer públicas las sanciones, establece lo siguiente:

"1. El procedimiento para hacer públicas las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales se iniciará, de oficio, mediante propuesta contenida en acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En dicha propuesta, así como en la resolución del órgano competente para resolver, deberá hacerse constar que dicha sanción será hecha pública en la forma prevista en este artículo.

2. Una vez que las sanciones adquieran firmeza, el órgano competente que dictó la primera resolución en el procedimiento sancionador, o, en su defecto, aquel que determine la Comunidad Autónoma, ordenará que se haga pública la sanción en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma de acuerdo con el correspondiente ámbito de competencia.

La publicación de la sanción se realizará en un plazo no superior a tres meses a contar desde la fecha de adquisición de firmeza del acto."

Por tanto, la posible publicación de sanciones se limita a una serie de supuestos concretos:

En primer término, solo son susceptibles de publicación las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales, excluyendo de tal procedimiento a las leves y graves.

En segundo lugar, la propuesta de publicación debe incluirse en el acta de infracción que da lugar al inicio del procedimiento sancionador y requiere un pronunciamiento expreso sobre la publicación por parte del órgano que resuelve el procedimiento.

En tercer término, no es posible la publicación hasta que la resolución sancionadora tenga carácter firme y debe ser el órgano competente que dictó la primera resolución en el procedimiento sancionador, o, en su defecto, aquel que determine la Comunidad Autónoma, el que haga pública la sanción en el Boletín Oficial del Estado o de la Comunidad Autónoma.

Por consiguiente, la propia norma viene a establecer como excepción y condicionada a la correspondiente resolución administrativa, la publicación de las citadas sanciones. Por otro lado, la publicidad, cuando proceda, se realiza a través de los correspondientes boletines oficiales a

instancias del órgano competente aludido. Partiendo de esta base, la citada información no tiene el carácter público invocado en la solicitud.

Cuarto: Por otro lado, entre la información solicitada, se incluye la aportación del *"Nombre o razón social de la empresa sancionada"* y el *"Número de Documento Nacional de Identidad de las personas físicas o Código de Identificación Fiscal de las personas jurídicas."*

La publicidad de tales datos supondría una vulneración del deber de reserva que afecta a todo el personal del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Recordar que la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Ley 23/2015, de 21 de julio, en su artículo 10.2 (Ley posterior a la Ley 19/2013 y especialmente aplicable a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social), establece que:

"También vendrán obligados a observar secreto y a no revelar, aun después de haber dejado el servicio, los datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento en el desempeño de sus funciones, salvo para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda."

Este deber de reserva es específico para todos los empleados públicos que prestan servicios en el Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y presenta una especial intensidad que lo diferencia del deber de reserva general que corresponde a todos los empleados públicos. Recordemos que el artículo 53 apartado 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público al señalar los Principios éticos que deben informar la conducta de los empleados públicos, establece que los empleados públicos: *"Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público."*

Por tanto, el deber de reserva que regula la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social es más amplio e intenso que ese deber general de sigilo. La obligación no se limita a mantener *"la debida discreción"* y a no *"hacer uso de la información obtenida para beneficio propio"*.

La redacción de la Ley 23/2015 es tajante al prohibir, de forma específica y más allá de la propia relación de servicio, la difusión de cualesquiera *"datos, informes o antecedentes de que puedan haber tenido conocimiento"*. La propia Ley también nos indica en qué supuestos no resulta aplicable esta prohibición y será, exclusivamente, *"para la investigación o persecución de delitos públicos, en el marco legalmente establecido para la colaboración con la Administración Laboral, la de la Seguridad Social, la Tributaria, la de lucha contra el fraude, en sus distintas clases, y con comisiones parlamentarias de investigación, en la forma que proceda"*.

La solicitud de referencia no se ajusta a ninguno de estos supuestos en los que cede el deber de reserva legal y el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, establece como límite del derecho de acceso a la información pública (apartado e) *"La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales,*



administrativos o disciplinarios", así como (apartado j) "El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial".

Quinto: En otro orden de cosas, como ya se ha indicado en el apartado anterior, se interesa conocer el "Nombre o razón social de la empresa sancionada" y el "Número de Documento Nacional de Identidad de las personas físicas o Código de Identificación Fiscal de las personas jurídicas."

Con respecto a los datos de las personas físicas (nombre y DNI de las personas físicas), en el artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que, para la inclusión de datos personales en la información pública, es preciso realizar una ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada, en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.

En este caso no se aprecia la existencia de ningún motivo de interés general para conocer la identidad de estas personas puesto que, ni se aporta motivo alguno en la solicitud, ni su difusión facilita al solicitante una información relevante que pueda mejorar el funcionamiento del servicio. Por tanto, a juicio de este órgano resolutor, debe primar el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal de las personas afectadas por el acta de infracción.

Sexto: En último término, actualmente no resulta posible técnicamente extraer la información solicitada de forma automatizada. En el supuesto que nos ocupa, la solicitud de [REDACTED], abarca los últimos 5 años. A este respecto, debemos indicar que el total de infracciones detectadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales, solo en el año 2021, ascendió a 18.948. Estas infracciones afectaron a un total de 230.441 trabajadores.

Por consiguiente, la obtención de la información exigiría una reelaboración previa para el tratamiento de los datos lo que supondría un nuevo tratamiento de la información, elaborándola "ad hoc" para cumplimentar esta petición. Esta acción obligaría a paralizar el resto de la gestión ordinaria de la unidad, impidiendo la correcta atención al servicio público encomendado.

Asimismo, al solicitar la información correspondiente a todo el territorio del Estado, se produce una distorsión que se deriva de la existencia de un traspaso parcial de las funciones y servicios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a determinadas Comunidades Autónomas. Tras la aprobación de los Reales Decretos 206/2010, de 26 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios a la Generalitat de Cataluña en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y 895/2011, de 24 de junio, sobre traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, parte de la información solicitada debe facilitarse por el Gobierno Vasco y/o la Generalitat de Cataluña que han asumido el ejercicio de las funciones inspectoras en las materias de competencia autonómica. Por tanto, parte de estos expedientes, obran en las citadas administraciones públicas.

En relación con esta cuestión y como ha indicado el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su Criterio Interpretativo CI/007/2015, al interpretar la causa de inadmisión de una solicitud en base a lo previsto en el artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, "el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL



en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada.”

Como **conclusión**, en el caso que nos ocupa, para obtener la información solicitada se requiere la realización de un elevado número de consultas generando un volumen muy elevado de información, que además debe solicitarse a distintas unidades y órganos administrativos, incluso de otras administraciones públicas (Gobierno Vasco y Generalitat de Cataluña).

Incluso aunque fuera posible obtener toda la información en bruto, la elaboración de la respuesta al solicitante implicaría la reelaboración de la misma empleando medios humanos y materiales de los que no se dispone.

Por tanto, el contenido de esta parte de la solicitud no puede facilitarse al solicitante al no estar disponible la información, salvo que se efectúe un desarrollo específico que implica una reelaboración de la información actualmente existente, siendo preciso realizar una serie de tareas que van más allá de la mera recopilación de información.

Séptimo: Sin perjuicio de lo señalado en los apartados anteriores, una parte de la información solicitada, la relativa al número de infracciones por materias de actuación y la cuantía de las sanciones, es objeto de publicidad activa por parte de este Organismo Estatal. A tal efecto, anualmente se publica un Informe con el objeto de dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 20 y 21 del Convenio 81 y artículos 26 y 27 del Convenio 129 de la OIT, y a lo establecido en los acuerdos y programas del Comité de Altos Responsables de la Inspecciones de Trabajo (SLIC) de la Unión Europea. En esos informes se recoge la información que la Fundación solicita y que puede ser fácilmente accesible.

Estos informes, hasta el correspondiente al año 2021, están disponibles en la página web de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y pueden consultarse en el Anexo de los informes, en su apartado 2, en el siguiente enlace:

https://www.mites.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html

Por cuanto antecede, la **DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL RESUELVE:**

INADMITIR PARCIALMENTE la solicitud de acceso a la información solicitada por aplicación del artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013 y **CONCEDER PARCIALMENTE** por aplicación de los artículos 14.1 e) y j) y artículo 15 de la Ley 19/2013 en los términos previstos en la presente resolución.

Notifíquese esta resolución al solicitante, advirtiéndole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso



Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos el plazo se contará desde el día siguiente al de notificación de la presente resolución. Ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o reclamación que se estime procedente.

LA DIRECTORA DEL ORGANISMO ESTATAL

(documento firmado electrónicamente)

Carmen Collado Rosique